

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación: 050013105002220190015301  
Proceso: Ordinario  
Demandante: ANA MARÍA NARIÑO ARANGO  
Demandado: COLPENSIONES, SKANDIA S.A. y PROTECCIÓN S.A.  
M. P. MARIA PATRICIA YEPES GARCIA SL TSM  
Fecha de fallo: 14/04/2023  
Decisión: CONFIRMA, MODIFICA Y ADICIONA.

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 19/04/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	ANA MARÍA NARIÑO ARANGO
DEMANDADAS	COLPENSIONES, SKANDIA S.A. <sup>1</sup> y PROTECCIÓN S.A.
LLAMADA EN GARANTÍA	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. <sup>2</sup>
ORIGEN	Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín <sup>3</sup>
RADICADO	05001-31-02-022-2019-00153-01
TEMAS	Ineficacia de traslado de régimen pensional
CONOCIMIENTO	Consulta y apelación
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia

En la fecha señalada, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del art. 13 de la Ley 2213 de 2022 profiere sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por ANA MARÍA NARIÑO ARANGO contra COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A., en el cual se vinculó a SKANDIA S.A. como Litis consorte necesario por pasiva, quien a su vez llamó en garantía a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda<sup>4</sup>

La señora Ana María Nariño Arango, formula demanda contra Colpensiones y Protección S.A., pretendiendo se declare: i) la ineficacia del traslado al Régimen de

<sup>1</sup> 01PrimeraInstancia; 45. 2019-00153 Ordena vincular a Skandia como litisconsorte por pasiva.pdf. Mediante auto del 17 de noviembre de 2020 el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín llamó a Skandia Pensiones y Cesantías S.A., como litis consorte necesario por pasiva, luego de verificar con la documental aportada por Protección S.A., que la hoy demandante se afilió a esta AFP en el año 2006.

<sup>2</sup> 01PrimeraInstancia; 61AdmiteContestación yLlamamiento.pdf. El 27 de julio de 2022 el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito Laboral de Medellín admitió el llamamiento en garantía formulado por Skandia Pensiones y Cesantías S.A. a Mapfre Colombia Vida Seguros S.A.

<sup>3</sup> 01PrimeraInstancia; 50.RemiteExpedientealJdo25lab.pdf. En auto del 8 de junio de 2021 el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín remitió el presente proceso al Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín, de conformidad con el Acuerdo CSJANTA21-16 de febrero 24 del año 2021 del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, dictado con base en el Acuerdo PCSJA20-11650 de octubre 28 del año 2020 del Consejo Superior De La Judicatura.

<sup>4</sup> 01PrimeraInstancia; Ana María Nariño Arango - Demanda, Págs. 1/4.

Ahorro Individual con Solidaridad administrado por Protección S.A., por existir incumplimiento al deber de información por parte de esta AFP. Como consecuencia de lo anterior, **ii)** que se condene a Protección S.A., a trasladar a Colpensiones sus aportes realizados al RAIS, **iii)** y que se condene a Colpensiones a recibir estos valores y a tenerla como afiliada al RPM sin solución de continuidad desde el 17 de febrero de 1993. **iv)** Costas procesales a cargo de las demandadas.

Fundamentó sus pretensiones en que se afilió al extinto Instituto de los Seguros Sociales -ISS- el 17 de febrero de 1993 y posteriormente se trasladó a la AFP Protección S.A., el día 23 de marzo de 1995, fruto de una asesoría en la cual el funcionario de este fondo privado le indicó que el ISS se iba a terminar y en consecuencia no se podría pensionar si continuaba afiliada a esta entidad; Además de ello omitió explicarle las posibles desventajas de trasladarse al RAIS y en su lugar la brindó una información parcializada y sesgada con la intención de concretar el acto de traslado. Por otra parte, no recibió reasesoría pensional cuando se encontraba próxima a cumplir los 47 años de edad.

El 15 de agosto de 2017 elevó una solicitud a Protección S.A., de invalidación de su afiliación, pero esta le fue rechazada bajo el argumento de que su vinculación se presumía legal y que sólo podía ser desvirtuada por una autoridad competente. El 5 de septiembre de 2017 radicó un formulario de traslado ante Colpensiones, sin embargo, el mismo día la administradora del RPM negó su petición por encontrarse a diez años o menos de cumplir la edad exigida para acceder a una pensión de vejez.

### **Oposición a las pretensiones de la demanda**

Quienes conforman la pasiva, se opusieron a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, así:

#### **i) Colpensiones<sup>5</sup>**

Señaló que no hay lugar a declarar la nulidad o ineficacia del traslado de régimen realizado por la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, en tanto la señora Nariño Arango no cumple con los requisitos estudiados por la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia para determinar la viabilidad o no de una declaración de tal índole. En armonía con lo anterior se opuso a una eventual condena en costas procesales y agencias en derecho. Excepcionó: Inexistencia de la obligación, prescripción, imposibilidad de condena en costas, buena fe y excepción innominada.

#### **ii) Protección S.A.<sup>6</sup>**

El acto de traslado de régimen efectuado en el año 1995 a Protección S.A., se dio en cumplimiento de la normatividad vigente para aquella época, no existiendo vicios en el consentimiento en su traslado primigenio, toda vez que Protección S.A., no incumplió con su deber de información en la medida de que ilustró a la hoy demandante respecto de las características del RAIS y de sus diferencias con el RPM de modo que

---

<sup>5</sup> 01PrimeraInstancia; 12 - 2019-00153 - contestación demanda Colpensiones.

<sup>6</sup> 01PrimeraInstancia; 23 - 2019-00153 - contestación demanda Protección.

su traslado fue válido y eficaz, y en consecuencia produjo plenos efectos jurídicos. Lo anterior sin perder de vista que la actora se trasladó posteriormente a Skandia S.A., en el año 2006 y regresó a Protección S.A., en el año 2007, traslados en donde igualmente no existieron vicios del consentimiento y se le brindó información suficiente y clara, con la intención de configurar un consentimiento informado. Excepcionó: Falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe y prescripción.

### **iii) Skandia S.A.<sup>7</sup>**

El traslado de régimen celebrado por la señora Nariño Arango con Skandia S.A., es totalmente válido y cumplió con los requisitos legales, habida cuenta de que la asesoría practicada a la demandante en el año 2006 se efectuó conforme a los parámetros exigidos por la Ley 100 de 1993, el estatuto financiero del mismo año y demás normas posteriores que ampliaron el espectro del deber de información, el cual fue cumplido a cabalidad por Skandia S.A. toda vez que a la demandante se le brindó información cierta, suficiente y oportuna acerca de las diversas características que definen el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. Excepcionó: Prescripción, buena fe, cobro de lo no debido por inexistencia de la obligación y la que denominó genérica.

### **iv) Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. (Llamada en Garantía)<sup>8</sup>**

No existe prueba alguna que sugiera que la demandante fue víctima de un vicio en su consentimiento, la cual además no ha formulado reproche alguno en contra de Skandia S.A., por fallas en el deber de información, circunstancia que da cuenta de su consentimiento informado a la hora de diligenciar el formulario de afiliación. De igual relevancia es que los actos jurídicos pueden ser saneados incluso existiendo un hipotético vicio en el consentimiento, de conformidad con lo establecido en los artículos 1743 y 1752 del Código Civil, figura que resulta aplicable al caso concreto, máxime tratándose de un acto jurídico celebrado en el año 1995.

De otro lado, a la actora le asistía el deber de cuidado y sin embargo despreció las múltiples herramientas brindadas por la AFP para obtener información relevante acerca de su presente y futuro pensional, por lo que debe valorarse su actitud despreocupada y negligente desde la óptica del principio del Derecho '*nadie puede alegar en su favor su propia culpa*', el cual es aplicable en materia laboral.

Excepcionó: Inexistencia de causal de ineficacia o nulidad, ratificación o saneamiento de la nulidad, nadie puede alegar en su favor su propia culpa, improcedencia de reintegro de los rendimientos devengados y gastos de administración, prescripción y la que llamó genérica o innominada.

### **Sentencia de primera instancia<sup>9</sup>**

El 3 de agosto de 2021, el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín declaró la ineficacia del traslado efectuado por la demandante al RAIS el 24 de marzo de 1995 y de los consecuentes traslados horizontales, entendiendo para todos los efectos legales que siempre ha permanecido afiliada en el RPMPD hoy administrado

---

<sup>7</sup> 01PrimeraInstancia; 47. 2019-00153 Contestación Skandia.pdf. Págs. 2/23.

<sup>8</sup> 01PrimeraInstancia; 1Contestación Mapfre.pdf.

<sup>9</sup> 01PrimeraInstancia; 75ActaAudienciaConcentrada.pdf.

por Colpensiones. **Condenó a Protección S.A.**, a trasladar a Colpensiones, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, todos los dineros que reposen en la cuenta de ahorro individual de la demandante, incluyendo las cotizaciones completas y los respectivos rendimientos financieros, sin lugar a descontar el dinero del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, primas de reaseguros de Fogafín, gastos o cuotas de administración y sumas adicionales de la aseguradora y reaseguradora, que se hubiesen podido generar por los periodos comprendidos entre el 1 de abril de 1995 y el 28 de febrero de 2006, y desde el 1 de marzo de 2007 y hasta la fecha en que se realice el traslado efectivo de esos recursos. Así mismo, **condenó a Skandia S.A.**, a trasladar a Colpensiones, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, los descuentos que realizó a la actora por concepto de prima de reaseguro de Fogafín, gastos o cuotas de administración y sumas adicionales de la aseguradora y reaseguradora, descontados entre el 1 de marzo de 2006 y el 28 de febrero de 2007. Puntualizando que las sumas por concepto de descuentos deberán trasladarse por las AFP del RAIS debidamente indexadas y con cargo a sus propios recursos, además de que deberán discriminar los valores, detallando pormenorizadamente los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante. Ordenó a Colpensiones recibir los anteriores valores de parte de Protección S.A., y Skandia S.A., y a incorporarlos como cotizaciones en la historia laboral de la demandante.

**Ordenó a Protección S.A.**, en el evento en que hubiese recibido el bono pensional en el que estarían representadas las cotizaciones al RPM de la demandante, a restituirlo a la oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que esta entidad proceda con su anulación. Absolvió a Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., de todas las pretensiones formuladas en su contra por Skandia S.A. Condenó en costas a Skandia S.A., y a Protección S.A., fijando como agencias en derecho en favor de la demandante la suma de \$1.000.000 de pesos, asumido en partes iguales, y respecto al llamamiento en garantía condenó en costas a Skandia S.A., fijando agencias en derecho en la suma de \$500.000 pesos en favor de Mapfre Colombia Vida Seguros S.A.

Para fundamentar lo decidido, la juez de primera instancia acudió al precedente judicial vigente en la materia y señaló que a Protección S.A. le correspondía demostrar el cumplimiento de su deber de información en forma eficiente, eficaz, completa, oportuna y comprensible antes de la suscripción del formulario de afiliación, carga probatoria que no satisfizo con el interrogatorio de parte, ni con los documentos aportados al proceso, declarando en consecuencia la ineficacia de traslado de régimen pensional.

### **Recursos de apelación**

**Apoderada de Protección S.A.:** Solicitó revocar en su integridad la sentencia proferida por la A Quo, señalando que se aparta de la postura jurisprudencial acerca de la carga dinámica de la prueba, en la medida de que ésta resulta desproporcionada en casos como el presente ya que las entidades accionadas se ven en la obligación de aportar pruebas respecto de un acto jurídico acaecido hace una cantidad considerable de años. Del mismo modo indicó que no debe pasarse por alto que si bien existía un deber de información desde la Ley 100 de 1993 y el Decreto 663 del mismo año, dicha información no se exigía que quedara por escrito, únicamente se

exigía la constancia de voluntariedad y libertad en la decisión, situación que quedó plenamente demostrada con el interrogatorio practicado a la demandante.

Respecto a las cuotas de administración, manifestó que de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 7 de la Ley 797 de 2003 este concepto se deduce en ambos regímenes pensionales, por lo que si la hoy demandante hubiera permanecido afiliada en el Régimen de Prima Media también se le habría descontado este valor.

**Apoderado de Skandia S.A.:** Inconforme con la decisión de instancia, interpuso recurso de apelación contra la totalidad de la misma, manifestando en primera medida que cumplió con el deber de asesoría al brindar a la demandante información acerca de las condiciones de su afiliación así como de las características del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, en cumplimiento del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, bajo el entendido de que para aquella época a Skandia S.A., le correspondía darle información verbal, debiendo entenderse que la afiliación de la actora con ésta AFP fue fruto de su libre selección.

En segundo lugar, se opuso a la condena a trasladar a Colpensiones los gastos de administración, las primas de seguros previsionales y el dinero destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, con la respectiva indexación. Respecto a los gastos de administración indicó que se trata de un valor generado en ambos regímenes, en virtud de una disposición legal el cual, se descuenta como consecuencia de la gestión de los recursos de la actora. Frente la prima de seguros previsionales advirtió que se descuentan periódicamente a los afiliados para la cobertura de las contingencias de invalidez o muerte y en relación con el dinero destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que no se destina a financiar la pensión del afiliado y se descuenta conforme a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993.

Finalmente, se opuso a la absolución de la llamada en garantía Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., indicando que en la contestación a la demanda se allegaron las respectivas pólizas suscritas con esta aseguradora, donde se observa la cobertura frente a la afiliación de la demandante, razón por la que está llamada a devolver a Colpensiones el dinero que le fue entregado en razón de la vinculación de la actora con Skandia S.A.

### **Alegatos de conclusión en segunda instancia**

Una vez concedido el traslado para alegar de conclusión en esta sede, Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., Skandia S.A., la parte demandante y Colpensiones lo recorrieron oportunamente, mientras que Protección S.A., se abstuvieron de pronunciarse.

### **Mapfre Colombia Vida Seguros S.A.<sup>10</sup>**

Solicitó confirmar el fallo de instancia, en cuanto declaró la improcedencia del llamamiento en garantía realizado por Skandia S.A., a Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., y consecuentemente confirmar la condena en costas a Skandia S.A., con motivo

---

<sup>10</sup> 02SegundaInstancia; 03AlegatosMapfre2220190153.pdf.

del llamamiento en garantía. Para ello remitió a los argumentos expuestos en su contestación al llamamiento en garantía y a los alegatos de conclusión presentados en primera instancia.

### **Skandia S.A.<sup>11</sup>**

Solicitó revocar en su integridad el fallo proferido por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, alegando que el acto de traslado es eficaz, pues no existen razones fácticas o jurídicas para declarar la ineficacia del traslado, puesto que la decisión del demandante fue espontánea y sin presiones, y su traslado se hizo en atención a los requisitos de ley exigidos para la época, esto es, conforme al artículo 97 del Decreto 663 de 1993 en lo que respecta al cumplimiento del deber de información por parte de la AFP, y el artículo 11 del Decreto 692 de 1994 en lo que refiere al formato y características del formulario de afiliación, de modo que para la época no se exigía ningún documento que probara la calidad de la información brindada en la asesoría. Adicionalmente, la actora contó con varias oportunidades para retornar al RPM y no hizo uso de ellas, por lo que debe rememorarse que el desconocimiento de la ley no sirve de excusa, tal y como dispone el artículo 9 del Código Civil colombiano. Lo anterior sin perder de vista que los hechos narrados por la señora Nidia dejan entrever que su motivación para retornar a Colpensiones es netamente económica

No obstante lo expuesto, solicitó que el hipotético caso de que se revoque la sentencia, no se condene a trasladar los dineros descontados por gastos de administración, seguros previsionales y toda suma diferente a la cuenta de ahorro individual, argumentando que estos descuentos se encuentran justificados en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 y que ordenar su traslado constituiría un enriquecimiento sin justa causa en favor de Colpensiones; Situación que ha sido abordada por el concepto de la Superintendencia Financiera de Colombia del 17 de enero de 2020, radicado 2019152169-003-00.

### **Demandante<sup>12</sup>**

Solicitó confirmar en su totalidad la sentencia de instancia, argumentando que no existen pruebas que demuestren que la AFP Protección S.A le brindó a la demandante una asesoría integral, veraz, oportuna y completa, en donde se le hayan expuesto las ventajas y desventajas del RAIS y del RPM, ni tampoco se probó que le hayan informado de la prohibición legal de trasladarse de régimen hasta faltarle diez años o menos para adquirir la edad de pensión. Elementos que permiten concluir que la Administradora de Fondos de Pensiones no cumplió con su deber de información y en virtud de ello no se puede afirmar que la demandante tomó una decisión informada, libre y voluntaria al momento de realizar su traslado al RAIS a través de Protección S.A. Postura que correctamente asumió la A Quo en su fallo y se encuentra fundamentada en el precedente jurisprudencia vertical dictado en la materia.

### **Colpensiones<sup>13</sup>**

Solicitó revocar el fallo de primera instancia expresando que, si bien el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 663 de 1993 dispusieron la libertad de escogencia de régimen pensional y el deber de las AFP de informar al consumidor financiero, solo

---

<sup>11</sup> 02SegundaInstancia; 04AlegatosPoderSkandia2220190153.pdf. Págs. 3/6.

<sup>12</sup> 02SegundaInstancia; 05AlegatosDemandante2220190153.pdf. Págs. 4/6

<sup>13</sup> 02SegundaInstancia; 06AlegatosColpensiones2220190153.pdf. Págs. 3/5.

con la expedición de la ley 1748 del 2014 se estableció la obligación de brindar información en los términos que hoy se exigen por la jurisdicción, de lo cual se colige que en el presente caso se está imponiendo cargas adicionales a las previstas en las leyes para la época del traslado, considerando que la demandante se vinculó al RAIS en el año 1995. Además de lo expuesto, también deben ser evaluados los actos de relacionamiento de la demandante, como lo son la permanencia, el silencio, la aceptación en el tiempo y otros relacionados con las actividades financieras que ejecuta un usuario durante su vida laboral, de cara a determinar una posible convalidación del acto jurídico de traslado.

En otro orden de ideas, solicitó que en el evento de confirmar la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen, se ordene a Protección S.A., devolver a Colpensiones la totalidad de valores que se hubieren recibido en razón de la afiliación de la demandante, tales como: cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del Código Civil, esto es, con los rendimientos que se hubieren causado, cuotas de administración y la indexación de las mismas, el porcentaje de garantía de pensión mínima y el traslado de los reaseguros y seguros previsionales. Y que así mismo se ordene a Skandia S.A., trasladar con destino a Colpensiones, los valores correspondientes a las cuotas de administración, incluyendo sumas adicionales de la aseguradora, el porcentaje de garantía de pensión mínima y el traslado de los reaseguros y seguros previsionales, que se causaron en el periodo que la demandante estuvo afiliada a esa entidad. Considerando que al haber existido una conducta indebida por parte de éstas AFP del RAIS éstas deben asumir con cargo a sus propios recursos los deterioros sufridos por el bien administrado.

## II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La competencia de la Sala está dada por el grado jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, conforme al artículo 69 del CPTSS modificado por la Ley 1149 de 2007, y en acatamiento de la decisión de la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, en sentencia de radicado 7382 de 2015.

Examinados los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por las demandadas, y los argumentos de la decisión de primera instancia, interpreta la Sala, que el **problema jurídico** a resolver se circunscribe a determinar: **a)** la viabilidad de declarar o no la ineficacia de la afiliación del demandante al RAIS, de ser procedente dicha declaratoria, se precisarán, **b)** las consecuencias de dicha declaración, como el que su afiliación al RPM se considere sin solución de continuidad, así como lo concerniente a los conceptos que deben trasladarse desde la AFP del RAIS hacia Colpensiones.

### Hechos relevantes probados documentalmente

Ana María Nariño Arango nació el 27 de septiembre de 1964<sup>14</sup>. Inició cotizaciones al extinto Instituto de Seguros Sociales -ISS- el día 17 de febrero de 1993<sup>15</sup>. El 24 de

---

<sup>14</sup> 01PrimerInstancia; Ana María Nariño Arango - Anexos. pdf. Pág. 1, GEN-DDI-CI-2017\_9329239-20170905093817.pdf, RatificaContestación Skandia.pdf. Págs. 21 y 103; 02 - 2019-00153 - anexos



marzo de 1995 suscribió formulario de afiliación a Protección S.A.<sup>16</sup> Posteriormente, el 23 de enero de 2006 diligenció formulario de vinculación a Skandia S.A.<sup>17</sup> y luego retornó a Protección S.A., el 18 de enero de 2007<sup>18</sup>. El 21 de junio de 2011 recibió reasesoría pensional de parte de Protección S.A., en la cual le informaron que no le convenía quedarse en esta AFP<sup>19</sup>. Al 22 de marzo de 2018 contaba con 1033.86 semanas cotizadas en toda su vida laboral<sup>20</sup>.

El 15 de agosto de 2017 solicitó a Protección S.A., invalidar su afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad<sup>21</sup>, pero el 7 de septiembre de 2017 esta entidad negó su petición bajo el argumento de que el acto de traslado cumplía con las exigencias establecidas en el artículo 11 del Decreto 692 de 1994<sup>22</sup>. El 5 de septiembre de 2017 suscribió formulario de afiliación a Colpensiones<sup>23</sup>, sin embargo, en la misma fecha la administradora del RPM rechazó su solicitud aduciendo que no era posible su traslado toda vez que se encontraba a diez años o menos de cumplir el requisito de edad para pensionarse<sup>24</sup>.

#### **a) Viabilidad de declarar o no la ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS.**

Con la finalidad de determinar la eficacia o ineficacia de la afiliación al RAIS por parte de la demandante, es menester acudir a los siguientes preceptos normativos que regulan la materia:

- i) Los artículos 48, 53, 335<sup>25</sup> y demás normas concordantes de la Constitución Política;
- ii) La Ley 100 de 1993 en sus artículos 1<sup>26</sup>, 3, 4, 10, 12, 13 literal b, Inciso 3º del Literal c) del artículo 60, 90, 97, 271; iii) Artículo 4 y demás normas concordantes del

---

demanda.pdf. Pág. 1; 47. 2019-00153 Contestación Skandia.pdf. Págs. 25 y 47; 2019-00153 Contestación Skandia.pdf. Pág. 24 y 60SusbanaContestación Skandia.pdf. Pág. 98. Se aportó registro civil de nacimiento de la demandante, el cual da cuenta de esta fecha, la cual no fue discutida por la pasiva dentro del proceso.

<sup>15</sup> 01PrimeralInstancia; Ana María Nariño Arango - Anexos.pdf. Págs. 15 y 16; 02 - 2019-00153 - anexos demanda.pdf. Págs. 15 y 16; 24 - 2019-00153 - anexos contestación demanda Protección.pdf. Pág. 17.

<sup>16</sup> 01PrimeralInstancia; Ratifica Contestación Skandia.pdf. Págs. 28 y 110; 24 - 2019-00153 - anexos contestación demanda Protección.pdf. Págs. 1 y 4; 47. 2019-00153 Contestación Skandia.pdf. Pág. 28; 47. 2019-00153 Contestación Skandia.pdf. Pág. 31 y 60SusbanaContestación Skandia.pdf. Pág. 105.

<sup>17</sup> 01PrimeralInstancia; RatificaContestación Skandia.pdf. 20, 28, 102 y 110; 24 - 2019-00153 - anexos contestación demanda Protección.pdf. Págs. 2 y 4; 47. 2019-00153 Contestación Skandia.pdf. Pág. 24; 47. 2019-00153 Contestación Skandia.pdf. Pág. 28; 47. 2019-00153 Contestación Skandia.pdf. Pág. 23; 47. 2019-00153 Contestación Skandia.pdf. Pág. 31 y 60SusbanaContestación Skandia.pdf. Págs. 97 y 105.

<sup>18</sup> 01PrimeralInstancia; 24 - 2019-00153 - anexos contestación demanda Protección.pdf. Págs. 3 y 4.

<sup>19</sup> 01PrimeralInstancia; 24 - 2019-00153 - anexos contestación demanda Protección.pdf. Pág. 6.

<sup>20</sup> 01PrimeralInstancia; 24 - 2019-00153 - anexos contestación demanda Protección.pdf. Pág. 19.

<sup>21</sup> 01PrimeralInstancia; Ana María Nariño Arango - Anexos. pdf. Pág. 27/29 y 02 - 2019-00153 - anexos demanda.pdf. Págs. 27/29.

<sup>22</sup> 01PrimeralInstancia; Ana María Nariño Arango - Anexos. pdf. Pág. 32/34 y 02 - 2019-00153 - anexos demanda.pdf. Págs. 32/34 y 24 - 2019-00153 - anexos contestación demanda Protección.pdf. Págs. 9/12.

<sup>23</sup> 01PrimeralInstancia; Ana María Nariño Arango - Anexos. pdf. Pág. 30, GAF-FAF-AF-2017\_9329239-20170905093817.pdf y 02 - 2019-00153 - anexos demanda.pdf. Pág. 30.

<sup>24</sup> 01PrimeralInstancia; Ana María Nariño Arango - Anexos. pdf. Pág. 31, GEN-RES-CO-2017\_9329239-20170905093817.pdf y 02 - 2019-00153 - anexos demanda.pdf. Pág. 31

<sup>25</sup> Las actividades que desarrollan las AFP al tenor del **artículo 335 de la CN.**, son de interés público y su ejercicio está reglamentado por la ley, en razón de la función que desempeñan.

<sup>26</sup> Consagró el artículo primero de esa ley 100, como objeto del aludido sistema: *garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad “para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afectan.”*

Decreto 656 de 1994<sup>27</sup>; iv) Decreto 692 de 1994; v) El Decreto 663 de 1993, cuyo artículo 72 en su literal f) adicionado por el art. 12 de la Ley 795 de 2003, contiene prohibiciones expresas<sup>28</sup> para las entidades del sector financiero entre ellas las AFP; y vi) los arts. 4, 10, 12 y demás concordantes del Decreto 720 de 1994<sup>29</sup>.

Adicionalmente es pertinente hacer un breve recuento de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, que estructura el tema, y está contenida en las sentencias 31314 y 31989 de 2008; 33083 de 2011; 12136 y 46292 de 2014; SL9519 de 2015; 47125, SL19447 y SL17595 de 2017; SL3496 y SL4989 de 2018; SL1421, SL1452, SL1688, SL4360 y SL4426 de 2019; STL 3716, STL4001, STL4084, SL2877, SL4811 de 2020, y SL1217, SL782 de 2021, basada en la necesidad de determinar si en cada asunto concreto, la AFP receptora de la afiliación satisfizo tanto para ese momento, como durante la vigencia de la relación con quien demanda la ineficacia, la obligación consagrada en el numeral 1.º del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, aplicable a las AFP desde su creación, de “*suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen*”. No pudiéndose predicar como sostiene la pasiva, ni la Superintendencia Financiera que, la existencia del deber de asesoría, sólo se originó desde la expedición de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015.

Advierte esa Alta Corporación de Justicia sobre la necesidad de que la decisión del traslado de Régimen esté precedida de toda información relevante que el Fondo de pensiones proporcione a quien pretenda afiliarse, la cual, debe ser suficiente, completa y clara sobre las implicaciones que le conllevaría dejar el anterior Régimen y sus posibles consecuencias futuras. Pues, conforme al Estatuto Financiero de la época en los Artículos 97 y siguientes, consagró que las administradas debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios que orientan la buena fe en las que se sancionaba la falta de información relevante.

Más adelante la Corte Suprema de Justicia precisó que son deberes de las administradoras de pensiones, los siguientes:

---

<sup>27</sup> Conforme al **artículo 4** y demás normas concordantes del **Decreto 656 de 1994**, las administradoras se sitúan en el ámbito de la **responsabilidad profesional**, que **las obliga a prestar de manera eficiente, eficaz y oportuna los servicios** inherentes a la calidad de instituciones de carácter previsional, considerados idóneos por sus conocimientos técnicos especializados y experiencia en compleja materia financiera, para garantizar derechos de sus asegurados; tal responsabilidad se mide con mayor rigor que el utilizado frente a las obligaciones entre particulares, en razón a la delegación del servicio público de seguridad social en pensiones que asumen en el RAIS, sostiene la SCL de la H. Corte Suprema

<sup>28</sup> **Se les prohíbe: “No suministrar la información razonable o adecuada que a juicio de la Superintendencia Bancaria deba entregarse al público, a los usuarios o a los clientes de las entidades vigiladas para que éstos puedan tomar decisiones debidamente informadas y puedan conocer cabalmente el alcance de sus derechos y obligaciones en las relaciones contractuales que los vinculan o puedan llegar a vincular con aquellas”.**

<sup>29</sup> Norma reglamentaria de los arts. 105 y parcialmente del 287 de la ley 100 de 1993 en cuanto al régimen de promoción y de responsabilidad de las sociedades AFP. disponiendo en el inciso final del artículo 4: QUE LAS ACTUACIONES DE LOS VENDEDORES EN EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD OBLIGAN A LAS AFP, respecto de la cual se hubiere promovido la respectiva vinculación, es decir, comprometen la responsabilidad de éstas como establece su art. 10 y precisa en el art. 12 que tales promotores deben suministrar suficiente, amplia y oportuna información a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante la vinculación, y con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.

- (i) Brindar información en todas las etapas del proceso de afiliación, desde la antesala hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.
- (ii) La información debe ser completa y comprensible. y,
- (iii) La información debe proporcionarse con prudencia, teniendo obligación de buen consejo, que puede llevar incluso a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.

Si bien los precedentes judiciales tenidos en cuenta por esta Sala corresponden a afiliados beneficiarios del régimen de transición, las razones que sustentan la ineficacia del traslado no tienen en cuenta esa circunstancia, por ser determinante en ello, la falta de información al afiliado.

Múltiples Salas de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín han considerado que, si bien los casos concretos abordados por la H. Corte Suprema de Justicia, refieren a personas que fueron beneficiarias del régimen de transición pensional consagrado en el art. 36 de la Ley 100/93, su *ratio decidendi* aplica para quienes se afilian al Sistema Pensional por primera vez o se trasladan entre regímenes en el marco del mismo, enfatizando en la necesidad de demostrar en cada proceso si la AFP suministró, a quien una vez fuera su potencial afiliado, *información clara, completa, suficiente*, en términos de transparencia y eficiencia, a fin de poder concluirse que la decisión adoptada entonces, obedeció a un conocimiento diáfano y preciso, no sólo de lo que se hacía, sino de las consecuencias que se derivarían de la suscripción del formulario de afiliación correspondiente y que por tanto, ese acto jurídico surgió de una real manifestación de voluntad, libre, espontánea y sin presiones.

Lo anterior, tal y como reitera la CSJ en sentencias SL 1688-2019 y 373 de 2020, que radica en la AFP el deber de brindar una información oportuna y adecuada, ello, indiferentemente de si se tiene o no beneficio transicional o si se está próximo a adquirir requisitos para pensionarse, “dado que la omisión al deber de información se predica frente a la validez o no del acto jurídico de traslado.”

Por estas razones, lo argumentado por la pasiva en torno a la capacidad de la demandante al suscribir el formulario, o su obligatoriedad de informarse en relación con las consecuencias de la celebración del acto jurídico, o sus actos de relacionamiento al efectuar cotizaciones, conocer extractos y no efectuar el traslado de régimen cuando legalmente estuvo habilitado para hacerlo, el no efectuar comparaciones entre fondos, o que las condiciones de funcionamiento de estos no son imposición de los mismos, si no de la normatividad que los rige, no constituyen razones atendibles para exonerar del cumplimiento de sus obligaciones a la Administradora, menos aún, por cuanto, en los asuntos como el presente, no se discute la capacidad jurídica de los celebrantes, ni la licitud de los traslados; se atiende es al hecho de haberse dado el traslado de régimen pensional sin que el mismo estuviese precedido de la satisfacción del cumplimiento del deber de información por parte de la administradora que captó al afiliado, quien, según sus dichos al absolver el interrogatorio de parte, escuchó que el ISS desaparecería siendo su mejor opción pensional suscribir traslado al régimen privado.

Tampoco son admisibles los argumentos expresados por la pasiva, en cuanto a que al éste obedeció a una decisión espontánea, sin presiones o apremios de alguna naturaleza y cumpliendo los requisitos exigidos en la ley, y se satisfizo el deber de información en los términos exigidos para entonces; situación que tampoco acreditó Colfondos S.A., limitándose a afirmar que así había ocurrido. El que asevere que la prueba documental que echó de menos la juez para que se diera cuenta de la información, no fue obligatoria si no desde la expedición de la Circular 016 de 2016 o que la obligación del buen consejo, la doble asesoría, e incluso la de desincentivar la afiliación son obligaciones que surgieron en 2010 y 2014, puesto que a la actividad misma de la administradora demandada subyace la obligación desde la creación misma del régimen pensional, de ilustrar suficientemente al potencial afiliado sobre las condiciones de ambos regímenes, su funcionamiento y expectativas, de manera que cada persona adopte una decisión informada y consciente sobre su futuro pensional.

No pudiéndose aplicar tampoco, a la aquí demandante la regulación de 2010 sobre deber del consumidor financiero, por cuanto su traslado se firmó en el 2000 cuando no existía esa disposición, pero sí estaba vigente y se ha consolidado la que ha obligado a las AFP a brindar la información no bastando con la suscripción del formulario de afiliación, por cuanto su uso, no exime, ni avala la omisión de los deberes impuestos por las leyes a las AFP, y por tanto, se reitera, que previo a la suscripción de ese formulario, éstas entidades deben en un acto responsable y comprometido con su función social, dar a conocer a los potenciales afiliados, todas las implicaciones del traslado, como sostuvo la Corte en **sentencia SL 4360 de 2019** Radicado 68852.

En cuanto a la inconformidad sobre la carga de la prueba, con dicho precedente, se desvirtúa además la aplicación al actor del principio de auto responsabilidad de los hechos afirmados en la demanda, pues en este caso, en virtud de la carga dinámica de la prueba ésta se radica en cabeza de las AFP que a través de sus agentes propiciaron el traslado de régimen del asegurado, tal y como se aprecia en la sentencia SL4426-2019, donde la Corte expone los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que suministraron una información clara y transparente, lo que se explica desde la premisa que el afiliado presenta una afirmación indeterminada *-la de que no recibió información-* y es la AFP a quien corresponde demostrar que cumplió con sus deberes en esa materia, al hallarse en mejor posición de ilustrarlo, por cuanto debe conservar en sus archivos la documentación que soporta el traslado, además, de estar facultado el fallador por el **artículo 167 del Código General del Proceso**, para distribuir la carga de la prueba a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar todo los elementos de convicción tendientes a esclarecer el objeto del litigio y en asuntos como el que hoy nos ocupa, sin duda quien debe cumplir dicha carga es la AFP del RAIS, por cuanto: i) Maneja la carpeta con la historia de cada afiliado, así como la información que le fue brindada al momento del trascendental acto del traslado o afiliación, **y la que se le haya entregado a lo largo de su permanencia en el fondo**, dirigida a orientarlo sobre las mejores opciones para que tome las decisiones que más le convengan; ii) Conoce y posee los datos de ubicación y preparación que recibió **el asesor** que tuvo a cargo la asesoría efectuada al afiliado y posibilitó que éste firmara el acto jurídico de vinculación o de traslado al fondo de pensiones.

En el sublite, mediante la prueba documental arribada, se evidencia que Ana María Nariño Arango nació el 27 de septiembre de 1964<sup>30</sup>, por lo que, al 1 de abril de 1994, cuando entró en vigencia el SGSSP para ella, por ser trabajadora dependiente del sector privado, contaba con 29 años de edad y no tenía 15 o más años de servicios y/o cotizaciones, por tanto, no fue beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Suscribió formulario de afiliación a Protección S.A., el 24 de marzo de 1995<sup>31</sup>, el cual acusa de ineficaz. El 5 de septiembre de 2017 suscribió formulario de afiliación a Colpensiones<sup>32</sup>, sin embargo, en la misma fecha la administradora del RPM rechazó su solicitud aduciendo que no era posible su traslado toda vez que se encontraba a diez años o menos de cumplir el requisito de edad para pensionarse<sup>33</sup>.

Adicionalmente, fue recaudado interrogatorio a la demandante, sin que se produjera confesión de su parte, pues en torno a las condiciones presentadas durante su traslado hacia el RAIS, manifestó que en el año 1995 dos asesores de Protección S.A., llegaron a su lugar de trabajo y procedieron a explicarle a los empleados que el Instituto de los Seguros Sociales se iba a terminar y que consecuencia estaba en riesgo su derecho pensional; Así mismo les dijeron que en ésta AFP del RAIS se podrían pensionar de manera anticipada y que su mesada pensional sería más alta que la ofrecida por el ISS. De otro lado, señaló que en esta asesoría no les informaron sobre la heredabilidad de sus aportes en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, no le hablaron de bono pensional, de la posibilidad de realizar aportes voluntarios, ni de las diferencias entre el RPMPD y el RAIS.

En este caso, la AFP Protección S.A., como encargada de tramitar la afiliación inicial de la demandante al RAIS, estaba llamada a demostrar que tal afiliación no se vio afectada en su eficacia por haberle suministrado la información suficiente, clara, completa a la entonces potencial afiliada, sin embargo no acreditó la satisfacción de su ineludible deber legal de brindar a la hoy demandante una oportuna información adecuada, suficiente, cierta y comprensible, en términos de transparencia y eficiencia respecto de la vinculación en los dos regímenes pensionales; ni sobre los beneficios e inconvenientes que le generaría el suscribirse a un régimen o a otro, y en general, las consecuencias del tal afiliación, entre ellas, las modalidades de la pensión, el capital necesario para acceder a la pensión de vejez de manera ordinaria, o anticipada, los componentes y variables para establecer el monto de la prestación económica en el RAIS y su comparativo en el RPM, los requisitos para heredar el capital de la cuenta de ahorro individual en caso de fallecimiento, el derecho de retracto, las implicaciones de la negociación anticipada del bono pensional, la posibilidad e incluso la necesidad de hacer cotizaciones adicionales, para obtener la prestación de vejez en el RAIS, entre otros aspectos relevantes, para generar en la posible afiliada, verdadero

---

<sup>30</sup> 01PrimerInstancia; Ana María Nariño Arango - Anexos. pdf. Pág. 1, GEN-DDI-CI-2017\_9329239-20170905093817.pdf, RatificaContestación Skandia.pdf. Págs. 21 y 103; 02 - 2019-00153 - anexos demanda.pdf. Pág. 1; 47. 2019-00153 Contestación Skandia.pdf. Págs. 25 y 47; 2019-00153 Contestación Skandia.pdf. Pág. 24 y 60SusbanaContestación Skandia.pdf. Pág. 98.

<sup>31</sup> 01PrimerInstancia; RatificaContestación Skandia.pdf. Págs. 28 y 110; 24 - 2019-00153 - anexos contestación demanda Protección.pdf. Págs. 1 y 4; 47. 2019-00153 Contestación Skandia.pdf. Pág. 28; 47. 2019-00153 Contestación Skandia.pdf. Pág. 31 y 60SusbanaContestación Skandia.pdf. Pág. 105.

<sup>32</sup> 01PrimerInstancia; Ana María Nariño Arango - Anexos. pdf. Pág. 30, GAF-FAF-AF-2017\_9329239-20170905093817.pdf y 02 - 2019-00153 - anexos demanda.pdf. Pág. 30.

<sup>33</sup> 01PrimerInstancia; Ana María Nariño Arango - Anexos. pdf. Pág. 31, GEN-RES-CO-2017\_9329239-20170905093817.pdf y 02 - 2019-00153 - anexos demanda.pdf. Pág. 31

consentimiento plenamente informado y por tanto, libre y voluntario en la selección o traslado de régimen de pensiones, y ese deber de información es exigible en cada etapa de la afiliación y ejecución del acto jurídico, como bien ha aclarado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

De ello no hay elementos de convicción en el plenario, pues la AFP Protección S.A., allegó el respectivo formulario de afiliación y afirmó que estando suscrito por la demandante, atribuyéndole que lo hizo de manera libre y voluntaria, y por contener las declaraciones que le exige el artículo 114 de la ley 100 de 1993, no es dable restarle valor y menos desconocer este acto; sin embargo, en este sentido, las sub reglas establecidas por la Alta Corporación definen que al momento de analizar si resulta procedente declarar la ineficacia de la afiliación: **a)** no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; **b)** en los términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones **allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados**, en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional. conforme al **artículo 1604 del Código Civil**, la prueba de la diligencia y cuidado recae en quien debió emplearlo y, ello no se satisface solo con allegar documentos previamente elaborados en los que se limita a llenar espacios en blanco, que suscriben las partes, sino con la evidencia real de que la información plasmada atienda las pautas para que se adopte una decisión completamente libre, y que la asesoría brindada fue suficiente para la persona. Lo cual, es acorde con lo normado en **los artículos 97 y 98 del Estatuto Financiero vigente en 1994**, referidos a la debida diligencia que debían emplear las AFP, según los cuales, no se trata sólo de completar un formato, ni adherir a una cláusula genérica, sino de haber transmitido elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, sea que estuviere o no la persona en transición.

Los considerandos de esta providencia también sustentan que, esta sala no acoja lo interpretado por la pasiva en el sentido de que los actos de la demandante posteriores al traslado, como su prolongado silencio, o el sufragar aportes, fueren indicadores de su intención de pertenecer al Régimen de Ahorro Individual, debiendo recordarse el reiterado precedente de la Sala de Casación Laboral, según el cual, el debate probatorio en los asuntos de ineficacia de traslado se encamina a establecer si, con anterioridad y al momento del acto de traslado, se cumplió el tantas veces nombrado deber de información, **sin considerar los actos posteriores que el afiliado pudiese realizar, pues** la jurisprudencia del órgano de cierre en materia de seguridad social ha dilucidado de manera uniforme que, si la debida asesoría no se brinda con anterioridad y/o al momento de la materialización del traslado, al no cumplir su propósito de generar consentimiento informado para el acto de traslado, se equipara a la ausencia de información (**SL1688-2019, SL2877-2020, SL2937-2021, SL3349-2021**), y adicionalmente, esa falta de información en esta materia, no se convalida por los traslados de administradoras dentro del Régimen de Ahorro Individual (SL3199-2021), no con el formulario denominado de reasesoría, por desconocerse cuáles fueron los argumentos que se dieron a la asegurada para que se abstuviera de retornar a Colpensiones.

De ahí que, no procede adoptar el criterio aislado contenido en la providencia **SL2440-2021**<sup>34</sup>, donde una de las Salas de Descongestión de la CSJ., expuso la tesis de los llamados “actos de relacionamiento,” que valga anotar, había formulado la Sala de Casación Laboral permanente en la SL413-2018, en un proceso donde se debatía el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, y fue necesario analizar la voluntad de permanencia del afiliado en un específico régimen pensional, por cuanto no resultaba diáfano a cuál de los regímenes pertenecía, litigio notoriamente ajeno a los asuntos de ineficacia de traslado de régimen pensional.

Conforme al precedente en cita, acogido por esta Sala, el incumplimiento de las mencionadas obligaciones de información por parte de Protección S.A., vulneradora de la libre y voluntaria selección de régimen prevista en el literal b del Artículo 13 de la ley 100 de 1993<sup>35</sup> genera consecuentemente la INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN AL RAIS, como respuesta jurídica a la transgresión de ese deber legal y ello implica que, el acto jurídico declarado ineficaz carezca de vida jurídica, y, por tanto no produzca ningún efecto, lo cual fue precisado en **sentencia SL-4360 de 2019**, concluyendo en que: “la sanción impuesta en el artículo 271<sup>36</sup> de la Ley 100 de 1993 consagra una ineficacia en sentido estricto, lo que conlleva que la consecuencia allí contenida es la exclusión de todo efecto al traslado”, lo cual, da lugar a garantizar a la accionante el ejercicio del derecho a la libre selección de régimen pensional, y dado que ha manifestado a lo largo del proceso, desde el escrito de demanda, que su voluntad es pertenecer al Régimen de Prima Media con Prestación Definida hoy administrado por COLPENSIONES, y a declarar que ha permanecido afiliada, sin solución de continuidad, lo que conlleva a la reactivación de su respectiva afiliación en este último régimen.

Adicionalmente, deviene innecesario analizar las condiciones de sus posteriores traslados horizontales dentro del Régimen de Ahorro Individual Con Solidaridad, pues la ineficacia del traslado de régimen afecta todo traslado entre administradoras que se haya presentado con posterioridad.

Tales motivaciones permiten **confirmar** en ese aspecto la sentencia conocida en apelación.

---

<sup>34</sup> por la Sala de Descongestión No. 4 de la Sala de Casación Laboral.

<sup>35</sup> **13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES.** El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características:

b. La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley.

<sup>36</sup> El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud<sup><1></sup> en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.

El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos para el control del pago de cotizaciones de los trabajadores migrantes o estacionales, con contrato a término fijo o con contrato por prestación de servicios.

## **b) Consecuencias de la declaratoria de ineficacia**

Atendiendo al principio de sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, con el fin de que COLPENSIONES cuente con los recursos necesarios, y fundamentalmente se garantice la no afectación financiera del Régimen de Prima Media, y pueda satisfacer las prestaciones que se generen a su cargo, producto de la declaratoria de ineficacia, todos los recursos recibidos con motivo de la afiliación al régimen de Ahorro Individual, deben trasladarse a la administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de las eventuales pensiones, por cuanto, tales sumas repercutirán en la conformación del derecho pensional, dado que el RPM es un fondo común al cual ingresan de forma indistinta los recursos de todos los afiliados y que a través del sistema de reparto intergeneracional se cubren las prestaciones causadas. Además de ser menester que, por efecto de la declaratoria de la ineficacia en asuntos como el abordado en este proceso, la parte beneficiada económicamente con el acto ineficaz por omisión del deber de información garantice que el patrimonio de la persona inducida a la afiliación no sufra deterioro, y pueda disfrutar de las prestaciones del RPM, como si hubiera permanecido en él.

Bajo las referidas premisas, se **confirmarán, modificarán y adicionarán** las órdenes impartidas a **Protección S.A.** desde la primera instancia, en el sentido que esta AFP del RAIS, dentro de los **30 días siguientes a la ejecutoria** de la presente providencia, no solo debe trasladar a COLPENSIONES **la totalidad** de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros que se han generado durante todo el tiempo en que la hoy demandante figuró como afiliada al RAIS., sino que **Skandia S.A., y Protección S.A, también deben trasladar a la referida AFP del RPM, las cuotas de administración, el dinero con destino al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y las sumas adicionales de las aseguradoras,** conceptos descontados durante el periodo de afiliación de la hoy demandante, pues no se discute la legalidad de tales descuentos, ni, si el dinero de la afiliada fue administrado adecuada y eficientemente, sino que, como consecuencia de la ineficacia del traslado inicial al RAIS, y por no haberse estudiado previamente a la afiliación de la situación particular de la hoy demandante, e ignorándose verdaderamente cuáles fueron los argumentos esgrimidos por dicha AFP para aseverar que cumplió con los deberes de información que sostiene haberle dado, no es pertinente exonerarla de la devolución de tales conceptos, independientemente de que Colpensiones no haya administrado el dinero de la afiliada, ni asumido los riesgos que esa actividad conlleva, no pudiendo discutir inexistencia de motivos para entregarlos, detrimento patrimonial, ni enriquecimiento sin causa para Colpensiones y la demandante, tampoco transgrede derechos de las demandadas, por evidenciarse la omisión de asesoría completa y previa a la migración de la accionante hacia el RAIS y dentro de ese mismo régimen, pues si bien existió una administración por parte de la AFP del RAIS, además del pago de seguros, consecuentemente a la declaratoria de ineficacia, todos los recursos deben trasladarse a Colpensiones, administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de la pensión que se genere en favor de la hoy demandante, como anteriormente se explicó.



Se rememora que, para efecto de la devolución de conceptos hacia el RPM, con anterioridad, esta Sala de Decisión disponía que, el monto trasladado no fuese inferior al valor total del aporte legal correspondiente en caso de que el afiliado hubiere permanecido en el Régimen de Prima Media y si así fuere, la AFP asumiera el pago de la diferencia, aplicando el precedente de la Corte Constitucional plasmado en las sentencias **C 1024 de 2004**, y en las **SU 062 de 2010** y **SU 130 de 2013** sobre los casos de las personas que regresan del RAIS al RPM, **y de otro lado**, y se abstenía de ordenar que las AFP del RAIS remitieran con destino a Colpensiones, los valores correspondientes a las sumas adicionales de las aseguradoras, tema que forma parte del recurso de apelación, ante las órdenes impartidas en la primera instancia que aquí se confirma.

Respecto a uno de los puntos de apelación presentados por el apoderado de Skandia S.A., referente a la absolución de la llamada en garantía Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., se precisa que se acogerá la postura asumida por la A Quo, toda vez que el contrato suscrito por Skandia S.A., con la aseguradora tenía como finalidad cubrir las contingencias de invalidez o muerte del afiliado, es decir, se trataba de una obligación de medios y no de resultados, y en este sentido Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., cumplió con el contrato suscrito con Skandia S.A., al asegurar tales eventualidades; Deviniendo improcedente exigirle el traslado de suma alguna a Colpensiones por la no ocurrencia de las contingencias aseguradas.

Pero, retomando el punto, y por las mismas razones expuestas en este acápite, considerando el precedente de la Sala de Casación Laboral<sup>37</sup> contenido en sentencias **SL 3202-2021, SL 2769-2021, SL3708-2021, SL 3710-2021- SL 3706-2021, SL 3571-2021 y SL 3709-2021**, esta Sala ha precisado que las cuotas de administración y los descuentos del seguro previsional, descontadas por las AFP del RAIS durante el periodo de afiliación de la hoy demandante ante ellas, se deben trasladar **por parte de las AFP del RAIS** debidamente **indexadas** y con cargo a sus propios recursos, aspecto en el cual, se adicionará la decisión de instancia, con el fin de que se satisfagan en su valor actualizado, dado que la pérdida de poder adquisitivo de la moneda colombiana constituye un hecho notorio.

Al momento de cumplirse esta sentencia, los conceptos deberán aparecer detallados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

---

<sup>37</sup> Esta Sala atiende el precedente judicial original de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a partir la sentencia con radicado 31989 de 2008 y dando aplicación al artículo 1746 del Código Civil, en los cuales fundamentan la *ratio decidendi* de estos procesos, donde esa Alta Corporación determinó que por efecto de la entonces denominada nulidad, hoy ineficacia, generada con ocasión del actuar negligente de las AFP del RAIS, en materia de información, éstas se encuentran obligadas a remitir a Colpensiones no sólo las cotizaciones, rendimientos, si los hubiere, cuotas o gastos de administración, lo destinado a garantía de pensión mínima sino también las sumas adicionales de la aseguradora, por tanto, se adopta en estricto sentido lo decidido por nuestro órgano de cierre en la materia, ordenando a Porvenir S.A., que traslade a Colpensiones, los valores descontados al demandante durante el tiempo de su afiliación en ella, por concepto de aportes para la Garantía de Pensión Mínima, y con cargo a sus propios recursos, sumas adicionales de las aseguradoras, además de las comisiones de administración.

El cumplimiento de tales órdenes será verificado por COLPENSIONES, de manera coordinada con SKANDIA S.A., y PROTECCIÓN S.A., sin trasladar consecuencias negativas a la actora.

Se ordenará a COLPENSIONES recibir de SKANDIA S.A., y PROTECCIÓN S.A., los recursos correspondientes a los conceptos aludidos, y se homologarán en el Régimen de Prima Media las semanas cotizadas por la actora durante su afiliación en el RAIS.

Así las cosas, se **confirmará, modificará y adicionará** la sentencia conocida en apelación.

### III. EXCEPCIONES

En grado jurisdiccional de consulta se estudian, además, las excepciones formuladas por la pasiva, las cuales quedan implícitamente resueltas, por haberse causado lo pretendido en la demanda.

En especial, no operó la prescripción pues la ineficacia no está sometida a dicha figura, por conllevar la inexistencia del acto jurídico sobre el que recae y el reconocimiento pensional se presentó como una de las consecuencias del retorno al RPM administrado por Colpensiones, además esta Sala, acoge la postura pacífica de la H. Corte Suprema de Justicia, respecto a que las acciones judiciales tendientes a comprobar la forma en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico, son imprescriptibles, como es el caso de la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales.

### IV. COSTAS

Costas en esta instancia a cargo de Protección S.A., y Skandia S.A., por haber resultado vencidas en sus recursos. Se fijan agencias en derecho en el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente en 2023 (1 SMLMV), distribuido en un 50% a cargo de cada una y en favor de la demandante.

### V. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

### RESUELVE

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín el 03 de agosto de 2021, dentro del proceso ordinario laboral de doble instancia promovido por ANA MARÍA NARIÑO ARANGO contra

COLPENSIONES, SKANDIA S.A., y PROTECCIÓN S.A., **modificándola y adicionándola**, en el sentido en que esta última:

Trasladará con destino a COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, la totalidad de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros generados durante todo el tiempo en que la demandante ha figurado como afiliada a dicho régimen.

Además, PROTECCIÓN S.A., y SKANDIA S.A., trasladarán a Colpensiones los valores descontados a la actora por concepto de aportes para la garantía de pensión mínima, y con cargo a sus propios recursos, trasladarán debidamente indexados a Colpensiones el valor de comisiones de administración y primas de seguros descontados en el mismo lapso que permaneció como afiliada ante ellas.

El cumplimiento de lo ordenado será verificado por COLPENSIONES, de manera coordinada con SKANDIA S.A., y PROTECCIÓN S.A.

Se ordena a COLPENSIONES recibir de SKANDIA S.A., y de PROTECCIÓN S.A. los recursos correspondientes a los conceptos aludidos, e incorporar los respectivos aportes pensionales completos en la historia laboral de la demandante como si hubiera permanecido en el RPM.

**SEGUNDO:** Costas en esta instancia a cargo de Protección S.A., y Skandia S.A., por haber resultado vencidas en sus recursos. Se fijan agencias en derecho en el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente en 2023 (1 SMLMV), distribuido en un 50% a cargo de cada una y en favor de la demandante.


Se ordena notificar lo decidido por edicto.

Devuélvase el expediente al despacho de origen.

Los Magistrados,



MARIA PATRICIA YEPES GARCIA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN  
(En licencia reconocida)